

El caso Arcediano

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información UT003/2014 tramitada ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua y cumplida parcialmente, el Gobierno del Estado realizó 198 estudios y proyectos sobre Arcediano para lo cual destinó 425 millones 540 mil 201 pesos con 65 centavos.

Entre los numerosos estudios, destacan entre otros, estudios topográficos y geológicos por seis millones 890 mil 979 pesos; estudios estructurales de monumentos históricos (Puente de Arcediano) 36 mil 699 pesos y levantamiento y reubicación de puente por 114 mil 281 pesos; proyecto de jardín botánico para Arcediano por 971 mil 771 pesos; estudios geotécnicos por 14 millones 580 mil 988 pesos; instalación de piezómetros por nueve millones 803 mil 951 pesos; operación continua de la planta móvil de CEAS cuatro millones 375 mil 762 pesos.

Además, proyecto ejecutivo de la obra de desvío y anteproyecto de la cortina de la presa, 33 millones 572 mil 558 pesos y mapeo geológico de la presa por 48 millones 306 mil 304 pesos.

*En cuanto a las obras, destacan 30 por un monto de 197 millones 168 mil 118 pesos con 60 centavos. Entre otras obras, destaca el camino de operación de Agua Prieta por 13 millones 672 mil 591 pesos; reubicación del Puente de Arcediano, **once millones 392 mil 749 pesos**; rehabilitación del camino de acceso al Aguacate, 29 millones 174 mil 524 pesos; limpia de ladera, 32 millones 376 mil 615 pesos; construcción de tres socavones, 18 millones 714 mil 411 pesos; **terminación de la reubicación del Puente de Arcediano, 15 millones 095 mil 856 pesos.***

*En estudios, proyectos y obras, el gobierno estatal gastó **622 millones 708 mil 320 pesos con 45 centavos**. A esto habría que sumarle el pago de indemnizaciones a los vecinos y acciones legales, que sumarían más de 200 millones de pesos, con lo que el capricho de Arcediano rebasaría los 800 millones de pesos.*

La misma respuesta UT003/2014 de la CEA, revela como una cereza del pastel, que en el proyecto de Arcediano, la presa que jamás se construyó, se destinaron 620 mil 595 pesos con 94 centavos para publicidad.

Juicio político: **Artículo 6º**. Es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el

artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Artículo 7.

IV.- Los actos u omisiones que contravengan la Constitución local o las leyes que de ella emanan o los reglamentos, cuando causen daños patrimoniales graves al Estado, al Municipio o a la sociedad, o motiven algún trastorno grave en el funcionamiento normal de sus instituciones;

Conflicto de intereses de Jesús Reynoso, es secretario general del congreso y presentó dos demandas contra el poder legislativo.

El ex presidente del Tribunal Electoral de Jalisco, Jesús Reynoso Loza, estaría incurriendo en conflicto de intereses al ostentar el cargo de secretario general del Congreso y al mismo tiempo sostener un par de demandas de amparo contra el poder legislativo.

Reynoso, quien fue designado en el puesto a propuesta de la fracción de Movimiento Ciudadano, presentó un juicio de amparo el 24 de julio de 2014 junto con los ex magistrados Rubén Vázquez, Luis Antonio Corona Nakamura y Guillermo Meza García, contra la resolución del congreso de disolver el Tribunal Electoral.

El expediente 1639/2014 es ventilado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, proceso que sigue vigente. También Jesús Reynoso y los otros ex magistrados, presentaron otra demanda de amparo contra el congreso el 14 de noviembre de 2014, la 705/2014 ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, donde reclaman entrega de salarios, emolumentos y prestaciones, hasta mayo de 2016 cuando terminaban su encargo en el Tribunal Electoral.

El conflicto de intereses de Jesús Reynoso, es que como secretario general debe conocer de todos los asuntos del congreso y el director jurídico que atiende las demandas de amparo, es su subordinado.

Un destacado jurista consultado, señaló que la única manera de que Jesús Reynoso no incurra en conflicto de intereses, es que desista de los amparos o presente su renuncia al cargo de secretario general.

Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:

IX.- Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

En el Congreso del Estado en la 158 y 159 legislaturas, llegaron a acumular 158 familiares, entre hermanos, primos, padres, hijos y conyuges.

XV.- Abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación, o promoción, por sí o por conducto de otro servidor público, a personas que tengan parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, para ocupar algún cargo público de los señalados en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Cuando al momento en que el servidor público asumió el cargo o comisión de que se trate ya se encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública, el familiar comprendido dentro de esta restricción, no existirá responsabilidad;

Pero en el congreso se desviaron recursos para cuentas personales de los ex diputados, se dejaron de pagar impuestos, se retenía cuotas de Pensiones de los trabajadores que no se pagaron y se esfumaron, se hicieron contratos por servicios que no se prestaron, etcétera.

XVI.- Abstenerse de solicitar, aceptar, recibir u obtener por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva o servicio, para sí o para un tercero u ofrecer una promesa para hacer, dejar de hacer o promover algo legal o ilegal relacionado con sus funciones. Esta

prevención es aplicable hasta por un año después de que haya cumplido el ejercicio de sus funciones;

Artículo 72. Las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación por escrito;

III. Sanción pecuniaria;

IV. Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a treinta días laborables;

V. Destitución;

VI. Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y

VII. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

El problema surgió en el Congreso del Estado que por una inexplicable omisión, no lanzó la convocatoria para sustituir al saliente procurador Gabriel Ibarra Félix cuyo período concluyó el pasado 13 de septiembre.

De acuerdo con el Código Urbano, tras la convocatoria emitida por el congreso, éste tiene que turnar la lista de aspirantes al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano para que revise los perfiles.

Una vez revisado si cumplen con los criterios de elegibilidad, el Consejo regresa la lista a la comisión de desarrollo urbano quien someterá el dictamen al pleno para la elección.

Sin embargo, en una desafortunada decisión, fue designado Pedro de Alba Letipichia en el puesto de director jurídico semanas antes de que terminara el encargo de Ibarra Félix y de esta manera convertirse más tarde en una especie de encargado de despacho.

Efectivamente, el Código Urbano en su artículo 27, contempla que en caso de ausencia definitiva del procurador, es el director jurídico quien asume el

puesto por seis meses en tanto se emite la convocatoria por el congreso para designar a un nuevo titular.

El problema es que la ley solamente establece este criterio cuando se está en el período respectivo y no cuando ha concluido el cargo oficial. Además, una vez que Gabriel Ibarra Félix terminó su labor como procurador, concluyeron también el resto de mandos directivos nombrados por él.

Es tan frágil el sustento legal, que hasta el propio Ibarra Félix podría ampararse y continuar en el cargo argumentando que se violentó el procedimiento al no expedirse una convocatoria e impedirle contender por una reelección que sí contempla la ley.

Por si fuera poco, el propio Pedro de Alba tendría problemas para acreditar su elegibilidad como director jurídico y hasta como encargado de la procuraduría. Según el artículo 23 bis del Código Urbano, quien ostente el cargo de director jurídico en la Prodeur, debe tener experiencia mínima de tres años en la materia, lo que incluso ya fue observado por colegios de arquitectos.

Previo a este encargo, De Alba fue director de Recursos Humanos y luego Secretario de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Lo grave del caso es que hay versiones que aseguran que el gobierno estatal en aras de la austeridad, podría incluir a la Prodeur junto a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente dentro de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), lo que de nuevo sería un error.

El espíritu de crear la Prodeur como organismo descentralizado y con patrimonio propio, es para no depender del ejecutivo y poder llamar a cuentas a los municipios. De acuerdo con el artículo 115 constitucional, el gobierno estatal no podría sancionar temas como usos de suelo.

Por la base jurídica endeble como está operando el actual encargado, Pedro de Alba Letipichia, prácticamente cualquier resolución de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, sería fácilmente echada por tierra por un simple recurso administrativo.

E incluir la Prodeur en la estructura de la Semadet, abriría otro flanco legal para ser atacado con una acción de inconstitucionalidad. Ambas situaciones, postran a la procuraduría en el limbo y muestran, lamentablemente, que los asesores legales no le entregaron la tarea completa al responsable del ejecutivo.

Código penal

CAPÍTULO II

Ejercicio Indebido y Abandono del Servicio Público

Artículo 145. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de treinta a doscientos días de salario, inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el término de seis meses a tres años, y destitución, en su caso, del que estuvieren desempeñando legalmente, a los servidores públicos que incurran en alguno de los casos siguientes:

I.- Que ejerza las funciones de su empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin llenar todos los requisitos legales;

Abuso de Autoridad

Artículo 146. Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría que incurra en alguno de los casos siguientes:

VI. Cuando obtenga de un subalterno parte o todo el sueldo de éste, le exija dádivas u otro servicio indebido;

Caso Elisa Ayón y otros en el congreso local.

Artículo 148. Comete el delito de peculado todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa. Si el monto de lo distraído no excede del equivalente a doscientos días de salario mínimo, se le impondrá al responsable una pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el importe de veinte a cien días de salario. Si excede el monto a que se refiere el párrafo anterior,

se impondrá al responsable de dos a doce años de prisión y multa hasta por el importe de cien a trescientos días de salario.

Artículo 149. Se impondrán las penas señaladas en el artículo anterior, tanto al servidor público que, a sabiendas, autorice o consienta el pago o la inclusión, en nóminas oficiales, de personas que recibiendo un salario del Estado o de los Municipios, no desempeñe sus servicios, así como al que dolosamente autorice, ejecute el pago, o lo reciba.

CAPÍTULO VII

Delitos Cometidos en la Custodia o Guarda de Documentos

Artículo 151. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión a los servidores públicos que, 35 indebidamente:

- I. Substraigan, destruyan u oculten documentos, papeles u objetos que les hayan sido confiados, o a los que tengan acceso por razón de su cargo;
- II. Quebranten o consientan en quebrantar los sellos de documentos o efectos sellados por autoridad competente, que tengan bajo su custodia; y
- III. Abran, o consientan que se abran sin la autorización correspondiente, papeles o documentos cerrados que tengan bajo su custodia.

Cuando se sustraigan, destruyan, alteren, oculten o se impida el acceso a la información financiera de las entidades fiscalizadas requerida por la Auditoría Superior del estado de Jalisco para dictaminar las cuentas públicas, la pena se aumentará en una mitad y, en este caso, no se tendrá beneficio de libertad provisional bajo caución.

CAPÍTULO VIII

Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades

Artículo 152. Comete este delito el servidor público que, indebidamente:

- IV. De a los fondos recibidos por razón de su cargo, dolosamente, una aplicación pública distinta de aquélla a que estuvieren destinados, o hiciere un pago ilegal;

Caso Villas Panamericanas.

VII. Otorgue por sí o por interpósita persona, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, deducciones o subsidios; efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico en beneficio propio, de su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia directa, socios o a sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; y VIII. Se valga de la información que posea por razón de su empleo cargo o comisión sea o no materia de sus funciones y que no sea de conocimiento público, para hacer por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido, a o cualquiera de las personas mencionadas en la fracción VII.

CAPÍTULO IX

Enriquecimiento Ilícito

Artículo 153. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumente sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzca como dueño sobre ellos, cuando no pueda justificar su procedencia lícita. Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito, se le aplicarán las siguientes sanciones:

- I. Cuando el monto no exceda del equivalente de quinientos días de salario, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, y multa de diez a cien veces el salario a que se refiere el tercer párrafo del Art. 26 de este Código;
- II. Cuando el monto exceda de la cantidad que resulte en la fracción anterior, se impondrán de dos a diez años de prisión y multa de cien a doscientos días de salario; y

III. En todos los casos, el decomiso de los bienes obtenidos con el ilícito, incluyendo dinero y los intereses que el capital hubiere devengado, será en beneficio del Estado.

Casos de ex funcionarios y funcionarios del actual gobierno.

Declaraciones inútiles.